

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



CONSULTA - SENTENCIA	
DEMANDANTE	CONSUELO GALLEGO PATIÑO
DEMANDADO	ITAÚ BANCO CORPBANCA S.A
RADICADO	05001-31-05-025-2021-00336-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de jubilación convencional
DECISIÓN	Confirma

Medellín, quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **CONSUELO GALLEGO PATIÑO** contra **ITAÚ BANCO CORPBANCA S.A.**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 045**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, decidir el grado jurisdiccional de consulta a favor de la demandante, en los términos del artículo 69 del CPT y SS., respecto de la sentencia que profirió el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 25 de agosto de 2023.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la demandante CONSUELO GALLEGO PATIÑO, nació el día 30 de octubre de 1944, por lo que cumplió 50 años de edad el mismo día y mes del año 1995. (sic)

Expresó que, la demandante prestó sus servicios mediante contrato de trabajo escrito, en forma personal y continua al BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO S.A. hoy ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A., desde el 14 de febrero de 1972 hasta el 22 de diciembre de 1996, y acreditó los 20 años de servicio, el 14 de febrero de 1992.

Señaló a su vez que, la demandante es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo suscrita el 23 de agosto de 1985, la cual aún continua vigente al momento de acreditar la actora los 20 años de servicio y la edad requerida, que, en el caso de las mujeres es 50 años de edad.

Indicó que, la demandante al 31 de agosto de 1.985 tenía contrato de trabajo vigente; y acreditó 20 años al servicio del banco el 14 de febrero de 1992 y cumplió 50 años de edad el 30 de octubre de 1995, y que, con esos requisitos, se estructuró su derecho a la pensión mensual vitalicia de jubilación pretendida en el presente proceso y sus intereses resarcitorios.

Expuso que, a la demandante le fue reconocida pensión de carácter voluntaria mediante acta de conciliación del 08 de noviembre de 1996, en cuantía del 75% del promedio devengado en el año anterior al retiro y allí se dijo que la pensión sería transitoria y no se especificó si se reconocía al tenor del artículo 54 y 55 convencionales, de allí la voluntariedad de la prestación.

Finalmente dijo que, la señora CONSUELO GALLEGO PATIÑO con el fin de interrumpir la prescripción, presentó solicitud a la entidad demandada el 03 de febrero de 2020, pidiendo el reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se DECLARE que la señora CONSUELO GALLEGO PATIÑO, tiene derecho a que ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. le reconozca y pague la pensión mensual vitalicia de jubilación prevista en el capítulo décimo de la convención colectiva de trabajo 1985-1987 (en adelante CCT), artículos 54° a 70° por cumplir con los requisitos previstos en el artículo 71 de la CCT., a partir del 22 de diciembre de 1996, fecha de terminación de la relación laboral con el banco, en la cual tenía acreditados más de 20 años de servicio y 50 años de edad; solicitando la liquidación en la forma prevista en convención colectiva de trabajo artículos 54,55,58 y 62.

Asimismo, que se DECLARE que la pensión de jubilación consagrada en los anteriores artículos de la CCT firmada el 23 de agosto de 1.985, vigente 1985-1987 entre el Banco y el Sindicato de trabajadores, tienen las prerrogativas de cualidades y condiciones de ser vitalicia, compatible y excluyente con la pensión voluntaria y/o legal, que percibe actualmente la actora, por cuanto fue firmada antes de la expedición del decreto 2879 de 1985, que se refiere a la compatibilidad de las pensiones extralegales, además, las partes establecieron de manera expresa las normas exclusivas que gobernarían la pensión mensual vitalicia de jubilación convencional, art. 70° (en armonía con el decreto 3041 de 1966) y artículo 71° (artículos del capítulo 10 de pensiones para los trabajadores con contrato al 31 de agosto de 1985); los artículos 54° (vitalicia), 58° (excluyente y a elección de la actora), 62° y finalmente si la partes querían que la pensión mensual vitalicia de jubilación convencional fuera compartida, así lo debieron haber consagrado expresamente en el estatuto convencional, lo cual no se estableció.

Y se CONDENE a la demandada, a pagar la pensión mensual vitalicia de jubilación a la señora CONSUELO GALLEGO PATIÑO, en forma retroactiva, esto es, desde el 22 de diciembre de 1996, fecha a partir de la cual acreditó 50 años de edad y tenía más de 20 años de servicios, teniendo como mesada inicial \$432.640, esto es, 100% del sueldo promedio mensual según los artículos 54, 55, y 58 de la CCT y hacia el futuro, incluidas las mesadas adicionales, y los

reajustes establecidos por Ley, y se reconozca el interés moratorio sobre el pago de las mesadas adeudadas o en subsidio la indexación.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

Se condene a la demandada, a pagar a la demandante la pensión que fue reconocida mediante el acta de conciliación del 08 de noviembre de 1996, de conformidad con las condiciones establecidas en la CCT vigente 1985-1987, suscrita el 23 de agosto de 1985, en forma plena, con el carácter de vitalicia y compatible con la pensión legal y en cuantía inicial de \$432.640, para el año 1996, correspondiente al 100% del sueldo promedio mensual devengado en el año anterior al retiro, la cual es excluyente con la pensión voluntaria y/o legal, conforme lo establece los artículos 71°, 54°, 55°, 58° y 62° convencionales; y hacia el futuro, incluidas las mesadas adicionales, y los reajustes establecidos por Ley, más el interés moratorio sobre el pago de las mesadas o en subsidiario la indexación, y que se condene a la demandada, al pago de las costas del proceso.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, el Banco Comercial Antioqueño S.A. (hoy Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A.) señaló que, efectivamente existió un vínculo laboral con la demandante que inició el 14 de febrero de 1972 al 22 de diciembre de 1996, el cual terminó por mutuo acuerdo entre las partes, tal y como quedó acordado en el contrato de conciliación celebrado el 8 de noviembre de 1996 suscrita ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín.

Puntualizó igualmente que, la Convención Colectiva de Trabajo, que aplicaría al caso bajo estudio, es la que tuvo **vigencia desde 1991 hasta 1993**, por extensibilidad del acta de conciliación. Y concretamente en la referida convención en su artículo 54 señala que, para ser beneficiario de la pensión convencional, se requiere cumplir 2 requisitos, los cuales son: **i)** Cumplir 50 años en caso de Mujer; y 55 años en caso de ser hombre, y **ii)** Tener 20 años de servicios en la compañía. **Y en el caso concreto**, al momento de finalizar el

vínculo laboral por mutuo acuerdo, el 22 de diciembre de 1996, la CCT de 1985-1987 no se encontraba vigente, y para la vigencia de esa convención, la demandante contaba con 42 años de edad, y aproximadamente 15 años de antigüedad al servicio del Banco.

Que el banco por mera liberalidad y en virtud del mencionado contrato de conciliación celebrado entre las partes, le reconoció a la actora una pensión convencional transitoria de jubilación a partir del 01 de julio de 1996.

La demandada planteó a título de excepciones de mérito las siguientes:
“EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN, EXCEPCIÓN GENERICA O INOMINADA”

En auto del 10 de julio de 2023, visible en el PDF 16, el despacho decretó las siguientes pruebas de oficio:

*“Oficiar a Itaú Corpbanca Colombia S.A. con el fin de que allegue los “acumulados de conceptos por empleado” desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 1995, de la señora Consuelo Gallego Patiño identificada con C.C. 32.405.786. Dado que se observan aportados únicamente los devengados a partir de 1 de enero de 1996.
• Oficiar a Colpensiones con el fin de que llegue al expediente digital la resolución No. 14418 del 1° de enero de 2001 emitida por el I.S.S., certificados de devengado año a año desde el año 2001 y el expediente administrativo que posea de la señora Consuelo Gallego Patiño identificada con C.C. 32.405.786”.*

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación, la juez de instancia, en audiencia pública celebrada el día 25 de agosto de 2023, absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra, e impuso costas procesales a la actora como parte vencida.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que, la demandante no tiene derecho a la pensión de jubilación solicitada bajo la CCT de 1985-1987, como quiera que cumplió los 50 años de edad, el 30 de octubre de 1994 y los 20 años de servicios, el 14 de febrero de 1992, por lo que causó su derecho a la pensión de jubilación, en vigencia de la convención colectiva de trabajo CC 1991- 1993.

Indicó que, al 31 de agosto de 1987, fecha en la cual expiró la vigencia de la CC de 1985-1987, la demandante no había causado el derecho a la pensión de jubilación allí prevista y, por tanto, no se trata de un derecho adquirido que debiera mantenerse con posterioridad a su vigencia.

Dijo que, el 23 de diciembre de 1996, se le reconoció pensión a la demandante, advirtiéndosele que dicha prestación estaría a cargo del ISS y que el banco la haría compartida cubriendo el monto total hasta que aquella cumpliera los 55 años, momento en que debía reclamar la pensión al ISS.

Que lo anterior, se hizo en cumplimiento de la conciliación efectuada entre las partes ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, el 08 de noviembre de 1996, en la cual se dejó consignado que se le reconocería a favor de la demandante “pensión convencional de jubilación” y la otorgada a la actora, no es diferente a la contemplada en la convención colectiva de trabajo.

Enfatizó que la demandante desde el 2 de noviembre de 1999, percibe pensión otorgada por el ISS mediante resolución 14418 del 01 de enero de 2001, anexa al expediente.

Y que, de la lectura de los artículos 54 y 58 de la convención colectiva de trabajo, no se desprende que las partes pactaron ambas pensiones para cubrir el mismo riesgo.

Expuso en último lugar que, la pretensión subsidiaria tampoco está llamada a prosperar como quiera que se pretende la liquidación de la pensión contenida en la CCT 1985-1987, sin embargo, reiteró que la actora no es beneficiaria de dicha convención.

VI. GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA.

En vista que la decisión de primera instancia fue desfavorable para la demandante, esta Sala conocerá a su favor bajo el grado jurisdiccional de consulta, conforme lo señalado en el art. 69 del CPTSS.

Alegatos de conclusión

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, los apoderados judiciales de **ambas partes** hicieron uso de los alegatos de instancia.

El apoderado judicial de la **parte demandante**, manifestó que el paréntesis que fue incorporado en la cláusula 71 de la convención 1991-1993, introdujo una aclaración e información complementaria, en el sentido de precisar que la norma fuente del derecho pensional aplicable a los trabajadores con contrato de trabajo al 31 de agosto de 1985, es la correspondiente al capítulo 10o (artículos 54 a 70) de la convención 1985-1987.

Agregó también que, en las Convenciones Colectivas 1993-1995, 1995-1997, 1997-1999, 1999-2001, 2001-2003, 2003-2005, 2005-2007, 2007-2009 pactaron que: *“El Banco manifiesta que continuará reconociendo para los empleados vinculados con contrato laboral con el Banco Santander Colombia S.A (antes Banco Comercial Antioqueño S.A), no procedentes del antiguo Banco Santander, todas las normas de la compilación convencional realizada y firmada el diez (10) de septiembre de 1991, y que no fueron modificadas o derogadas por las Convenciones Colectivas de trabajo”,* y que, conforme a lo anterior, esto quiere decir, que el capítulo décimo de la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987, mantuvo su vigencia a lo largo de las celebraciones de las posteriores Convenciones Colectivas, y por tanto, el capítulo décimo de la CCT 1985-1985, continuó vigente y debe ser aplicado a los trabajadores que tuvieran contrato de trabajo con el Banco, al 31 de agosto de 1985, requisito que cumple la demandante, por lo cual, se le debe aplicar el capítulo décimo de la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987.

Respecto de la causación, indicó que el artículo 54, establece que, el único requisito para obtener el derecho a la pensión de jubilación, es el tiempo de servicios (20 años continuos o discontinuos), de acuerdo al precedente constitucional establecido en la Sentencia de Unificación 228 de 2021; resaltando que, existen pruebas contundentes dentro del proceso, que demuestran claramente que, las partes acordaron que la pensión convencional se genera únicamente con el tiempo de servicio, y que, la edad constituye simplemente una condición para su exigibilidad, en particular, las pruebas documentales presentadas, dan cuenta que el Banco expresa claramente su reconocimiento de

la pensión de jubilación establecida en el artículo 54 de la convención colectiva de trabajo, para aquellos trabajadores que cumplen la edad requerida después de haber acreditado 20 años de servicio y actas de conciliación, anexas, firmadas por la demandada, ratifican lo anteriormente señalado.

En cuanto a la compatibilidad de la pensión de jubilación convencional, esbozó que, la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987, cuenta con una constancia de depósito fechada el 28 de agosto de 1985, y que el Decreto 2879 de 1985, el cual establece la compatibilidad de las pensiones convencionales, entró en vigencia el 4 de octubre de 1985, es decir, posteriormente al depósito de la Convención Colectiva de Trabajo, y que por tanto, previo a la entrada en vigor de dicho Decreto, la norma general establecía la compatibilidad de las pensiones convencionales, por lo que al momento de negociar la CCT 1985-1987, la intención de las partes era pactar una pensión de jubilación compatible con la legal.

Bajo la misma línea, acotó que estando vigente el decreto 2879 de 1985, se produjo la negociación de la convención colectiva de los años 1987-1989, 1989-1991 y 1991-1993, y las partes pactaron expresa y textualmente el reconocimiento de una pensión vitalicia de jubilación (art. 54º) y que esta pensión sería excluyente con la legal, a elección del trabajador (art. 58º).

En lo atinente a la liquidación de la pensión y los intereses moratorios, sostuvo que, la liquidación de la pensión de jubilación de la convención colectiva de trabajo, es el 100% del sueldo mensual, y que, los intereses de mora, son procedentes, a luz de la interpretación de la Corte Suprema, los cuales deben ser aplicados a todo tipo de pensiones, incluyendo las pensiones convencionales.

Dijo que el valor de la pensión arroja el siguiente guarismo: 80% + 60% + 40% + 30% para un total de 210% No obstante, se debe tener en cuenta lo señalado en el artículo 55 de la C-C de T, cuando reza: “...*En ningún caso la pensión de jubilación excederá el valor del sueldo mensual. (100% del sueldo mensual)*”, lo que implica que la liquidación de la pensión de jubilación de la convención colectiva de trabajo es el 100% del sueldo mensual.

Frente al acta de conciliación, señaló que, la cuantía de la pensión de jubilación del acuerdo conciliatorio se determinó un equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el año anterior al retiro (pensión legal), porcentaje que no existe en la convención colectiva de trabajo; pues en la misma trae una fórmula diferente, por suma de porcentaje con tope máximo del 100% del promedio de lo devengado en el año anterior al retiro, y en ningún acápite del acta de conciliación, se estipuló que el pago de la pensión convencional transitoria de jubilación, era la contenida en la Convención Colectiva de Trabajo, ni año, ni el articulado en que se basa su reconocimiento y mucho menos que su pago fuera anticipado.

En último lugar aseveró que, se le cambió la cualidad que tiene la pensión de jubilación del artículo 54° de la CCT, de ser vitalicia, y en su lugar, se determinó el pago de una pensión transitoria voluntaria. Se le cambió la calidad que tiene la pensión fijada en el artículo 58° la CCT de ser excluyente con la legal, para en su lugar, decretar que esta sería compartida con la que le fuera reconocida por sistema general de pensiones, y en cuanto a la cuantía de la pensión de jubilación del acuerdo conciliatorio.

Y pidió, que todos los puntos sean abordados íntegramente al decidir la consulta, esto por cuanto comporta aspectos sustanciales y procesales, así como la habilitación para ser expuestos eventualmente en un recurso extraordinario de casación.

De otro lado, a la doctora MARIANA CASTAÑEDA MADRID, portadora de la tarjeta profesional 390.559 del C. S de la J, se le reconoce personería para representar a ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. en los términos del poder sustituido.

La apoderada judicial de **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A**, solicitó que se confirme íntegramente el fallo de la primera instancia, argumentando en su escrito de alegatos de conclusión en sede de segunda instancia que, en el caso que nos ocupa, al momento de finalizar el vínculo laboral, la CCT de 1985-1987, no se encontraba vigente, por lo que no le era aplicable a la accionante,

máxime que, la demandante contaba apenas con 42 años de edad y 15 años de antigüedad, al servicio del Banco.

Reiteró que la pensión de la demandante tiene el carácter de compartida con la pensión de vejez que posteriormente le reconociera el ISS (hoy Colpensiones), porque así lo señala la convención, adicionalmente porque así se pactó expresamente entre las partes en el convenio celebrado.

Por último, la apoderada judicial, apoyó su narrativa, en sentencias proferidas por este Tribunal Superior de Medellín, en las cuales, en casos similares, al que es objeto de cuestionamiento, se confirmó la decisión de primera instancia, mediante las cuales, se negó el petitum de la parte activa.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver previas las siguientes,

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Pensión de jubilación convencional–

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El objeto central de esta Litis, en atención al grado jurisdiccional de consulta que se surte a favor de la demandante.

Por virtud del principio de consonancia, determinará esta sala **i)** sí, contrario a lo dispuesto por la Juez de primera instancia, la demandante es beneficiaria de la CCT 1985-1987 y por consiguiente le asiste derecho a la pensión vitalicia de jubilación prevista en dicha convención, y consecuentemente, si tiene derecho al reconocimiento del retroactivo

pensional, al reajuste establecido por Ley, y al pago de los intereses moratorio, o la indexación, **ii)** si la demandada debe pagar a la actora la pensión que le fue reconocida mediante el acta de conciliación del 08 de noviembre de 1996, de conformidad con las condiciones establecidas en la CCT vigente 1985-1987.

Para abordar los problemas jurídicos, cabe señalar que la Corte Constitucional en sentencia SU 1185 de 2001, en relación con la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) dijo:

*“Por tener la convención colectiva un claro contenido regulador y constituir sus cláusulas derecho objetivo, la misma adquiere el carácter de fuente formal del derecho. No obstante, por razón de su contenido, se considera que es una norma jurídica de efecto restringido, **aplicable tan sólo a las partes firmantes del acuerdo** y eventualmente a otros trabajadores de la empresa (Art.471 C.S.T). El alcance normativo de la convención colectiva, que se proyecta al contenido propio de los contratos de trabajo, se genera según la clase de sindicato que interviene en la negociación, por tal motivo, puede ser de empresa, industria, gremial o de oficios varios, siguiendo las definiciones que para el efecto señala el artículo 356 del C.S.T, pero nunca va a tener un alcance nacional, toda vez que este efecto se reserva para la ley. **Al tratarse de una norma jurídica, la convención se convierte en fuente del derecho laboral, es decir, en el precepto regulador de las relaciones laborales.***

Es cierto que al juez de la causa le corresponde fijarle el alcance a la norma que aplica, pero no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que en todo se ajuste a la Carta política. La autonomía y libertad que se le reconoce a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar los textos jurídicos, no puede entonces comprender, en ningún caso, aquellas manifestaciones de autoridad que supongan un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Según lo ha expresado la propia jurisprudencia, toda trasgresión a esta regla Superior en el curso de un proceso constituye una vía de hecho judicial, la cual debe ser declarada por el juez constitucional cuando no existan otros medios de impugnación para reparar esta clase de actuaciones ilegítimas, contrarias a los postulados que orientan la Constitución Política.

Pues bien, como hechos que no requieren debate probatorio se tienen los siguientes:

- i) Que la señora CONSUELO GALLEG0 PATIÑO, nació el 30 de octubre de 1944, de acuerdo a la cédula de ciudadanía que obra en el PDF 23.
- ii) Que la actora cumplió los 50 años de edad, el mismo día y mes del año 1994.
- iii) Que la demandante laboró al servicio del BANCO ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A., antes Banco Comercial Antioqueño, entre el 14 de febrero de 1972 al 22 de diciembre de 1996, y acreditó los 20 años de servicio, el 14 de febrero de 1992. (véase el hecho 2 de la contestación de demanda y contrato de trabajo)

Ahora bien, y según el escrito de demanda, se insiste en que la señora CONSUELO GALLEGO PATIÑO, es beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita el 23 de agosto de 1985, con vigencia del **1985-1987**, por cuanto, la convención no ha sido modificada, derogada o denunciada, a pesar incluso de haber expirado el vínculo contractual entre las partes.

Para zanjar el planteamiento del recurrente, se hace necesario diferenciar los conceptos de causación y disfrute.

A términos de lo dispuesto por la CSJ, es plausible el reconocimiento de la pensión convencional, cuando se cumple el tiempo y queda faltando la edad para su otorgamiento, así la persona ya no esté laborando en la empresa, en tanto, **“en términos generales el razonamiento imperante es que la edad no es requisito de causación sino de exigibilidad para el disfrute del derecho”**¹, luego entonces el requisito de la edad, es intrascendente para acceder a la pensión convencional y no se requiere para causar el derecho sino, que se repite, se requiere para establecer el momento en que ha de comenzar su disfrute.

En relación con lo antes expuesto, en sentencia SL 3343 de 2020, la CSJ indicó que:

“Es necesario precisar que las convenciones colectivas de trabajo son fuente formal del derecho y, por tanto, sus enunciados normativos deben interpretarse a la luz de los principios y métodos de la hermenéutica jurídica laboral, dentro de los cuales se encuentra la favorabilidad, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política. Por este motivo, la interpretación de las disposiciones convencionales de índole pensional debe realizarse de acuerdo con sus características y su finalidad, tal como lo adocrinó la Sala en sentencia CSJ SL16811-2017, en la que dispuso que los textos normativos, dentro de ellos, los acuerdos convencionales, deben ser comprendidos como «un todo y, por tanto, su interpretación debe ser integral, armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes», lo que naturalmente excluye interpretaciones textualistas, focalizadas en frases, palabras o expresiones elaboradas al margen de los sujetos y los contextos.

En lo que concierne a la interpretación concreta de dicha cláusula convencional, para la Corte deriva que el derecho pensional puede ser adquirido por los ex trabajadores que al momento del retiro tengan acreditado el tiempo de servicios, pero no la edad (negrilla fuera de texto)

Ahora bien, en la sentencia de la Corte Constitucional SU 228 de 2021, se señaló que:

¹ sentencias SL2597-2018 SL 4979-2020

“Aunque la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no haya sido inconsistente con su propio precedente, la línea que ha venido defendiendo genera dos consecuencias diferentes, pues, a partir de ella, ha aceptado que la edad para exigir la pensión convencional se puede alcanzar a pesar de estar disuelto el vínculo laboral y, al mismo tiempo, que solo es posible reconocerla a quienes obtuvieron la edad en vigencia de dicha relación; en este último caso, en contravía del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Fundamental, que la Corte Constitucional ha venido aplicando enfáticamente en sentencias como la SU-241 de 2015, SU-267 de 2019 y SU-445 de 2019, como se verá más adelante.

(...)

*En ese orden de ideas, la Sala considera que en el caso de la señora María Cristina Duque Barrera tanto la Sala Sexta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín como la Sala de Descongestión No. 1 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desconocieron el precedente constitucional en la materia, con lo cual se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y, en consecuencia, a la igualdad que le eran predicables frente al reconocimiento de su pensión convencional de jubilación de cara a la interpretación del artículo 54 de la convención colectiva, **que permite que el requisito de la edad se pueda alcanzar con posterioridad a la desvinculación laboral.***

(...)

*En el caso de la señora María Cristina Duque Barrera, **se reitera, su derecho pensional se causó antes de la fecha en que, según el tribunal de segunda instancia, expiró la convención colectiva, debido a que en su vigencia se cumplieron los 20 años al servicio del banco empleador**, lo cual se verifica incluso desde antes de su desvinculación el **22 de mayo de 2001**. El hecho de que eventualmente la convención hubiera podido fenecer el **31 de agosto de 2001**, o que la actora cumpliera los 50 años de edad el **19 de mayo de 2008**, no la limita para ser acreedora del derecho pensional, toda vez que, se insiste, **la edad no es una condición de existencia sino de exigibilidad de aquel.**”* (negrilla fuera de texto)

En consideración a lo expuesto, no cabe duda que la edad es requisito de exigibilidad para el disfrute del derecho, siendo entonces razonable en virtud del principio de favorabilidad, acoger este planteamiento y analizar el derecho pretendido.

Con el escrito de demanda y con el escrito de contestación, se adjuntó los textos de las convenciones colectivas de trabajo, pactadas entre el banco demandado y el sindicato de trabajadores. Particularmente, este Colegiado resalta para el estudio, las convenciones **CCT 1985-1987 - CCT 1991-1993**, que son objeto de controversia.

Para sustentar la aplicación de la CCT 1985-1987, el apoderado de la parte demandante expresó en el **hecho segundo de la demanda lo siguiente:**

“... Así mismo es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo suscrita el 23 de agosto de 1985, la cual aún continuó vigente al momento de acreditar el actor los 20 años de servicio y la edad requerida, que, en el caso de las mujeres, 50 años de edad.”

Destaca esta colegiatura que, las convenciones colectivas de trabajo, expresan de manera clara e inequívoca su vigencia en el artículo 118 y 117, señalándose singularmente en la **CCT 1985-1987**, que la misma se extiende del 1 de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 1987 y que la **CCT 1991-1993**, tiene vigor, del 1 de septiembre de 1991 al 31 de agosto de 1993.

Así, cosas, se tiene claro que la señora CONSUELO GALLEGO PATIÑO, al haber laborado en el banco accionado entre el 14 de febrero de 1972 al 22 de diciembre de 1996, cumplió los 20 años de servicio el 14 de febrero de 1992, y por tal, esta es la fecha de causación de la prestación y la que se debe tener en cuenta, a efectos de buscar cual convención colectiva se le debe aplicar, que corresponde a la **CCT 1991-1993**, que se reitera, tuvo vigencia del 1 de septiembre de 1991 al 31 de agosto de 1993.

Con base en lo anterior, debe traerse a colación, la norma convencional que consagra el derecho a la pensión de jubilación, de la **convención 1991-1993**, esto es, los artículos 54, 58 y 71, aducen lo siguiente:

*“Artículo 54. Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de **20 años de servicio** continuos o discontinuos a la Institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación que se computará sobre el promedio del sueldo básico devengado en el año anterior al retiro del banco, sin tener en cuenta bonificaciones, así: sobre los primeros seiscientos pesos (\$600) del promedio del sueldo básico devengado en el año anterior al retiro, el 80% de dicho sueldo; por los excedentes de seiscientos pesos (\$600) hasta mil pesos (\$1.000) el 60%; por los excedentes de mil pesos (\$1000) hasta tres mil pesos (\$3000) el 40% y por excedentes de tres mil pesos (\$3000) el 30%. De manera que el cómputo de la pensión será la suma de los diferentes porcentajes, en acuerdo con el promedio del sueldo básico devengado por el empleado en el año anterior a su retiro de la institución.*

Si al hacer la liquidación de acuerdo con la presente reglamentación, la pensión de jubilación resultare inferior a la que le correspondería al empleado de acuerdo con la ley vigente, el trabajador quedará jubilado con lo que le corresponde legalmente.”

*Artículo 71o. PENSIONES DE JUBILACION. **Todo lo comprendido en el capítulo 10o. de la actual compilación convencional vigente** (compilación 1.985-1.987) artículo 54o. a 70o. inclusive, se aplicará solamente a quienes al 31 de agosto de 1.985 tengan celebrado contrato de trabajo por escrito y vigente en esa fecha con el BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO. A quienes ingresen con vínculo laboral a partir del 1 de septiembre de 1.985 no se les aplicará el régimen de pensiones ya mencionado y se someterá en materia de pensiones a las leyes y demás disposiciones oficiales vigentes al momento de comenzar a disfrutar de su derecho.”* (resaltos intencionales)

En lo atinente a la pensión de jubilación, el artículo 58 de la CCT dispone:

“Artículo 58o. La pensión aquí fijada excluye y reemplaza la que sea señalada por las disposiciones legales que rijan al momento de hacer efectivo el derecho, pero el trabajador podrá optar por el pago de cualquiera de ellas a su elección. Si optare por la que se fija en la presente codificación, se entiende que el pago de ella incluye la fijada por la

ley y por consiguiente el Banco al cancelarla cumple con las disposiciones legales al respecto”.

Con base en lo anterior, esta sala precisa que no es posible aplicar a la demandante la **CCT 1985-1987**, por cuanto para su vigencia, la actora contaba con 43 años de edad (nacimiento 1944) y tenía **15 años de servicio** en la entidad (ingresó el 1972), es decir, que no cumplía los 20 años de servicio en esa temporalidad.

También resalta esta colegiatura que, según el texto de la CCT 1985-1987, no se convino la compatibilidad de la pensión legal y convencional, por el contrario, las mismas se excluyeron, máxime cuando en el artículo 70 de la CCT, se señaló lo siguiente: *“Lo establecido en este capítulo se aplica en consonancia con el decreto 3041 de 1966, por del cual el ISS asume los riesgos de vejez, invalidez y muerte.”* Lo que quiere decir que, los compendios convencionales desde el año 1985 y siguientes, que incluyen el artículo 70, señalan con claridad que existe una subrogación de los riesgos, por lo que, incluso desde la CCT de 1985, ya se había pactado que la pensión era compatible, lo que significa que **no hay un reenvío a dicho clausulado**, pues, se itera esta convención compila o reúne o junta, los beneficios, esto es, regula de manera íntegra todo lo concerniente a la prestación, y por tal, y no es admisible, ningún tipo de remisión.

Por otra parte, debe precisarse que, mediante acta de conciliación de fecha el 08 de noviembre de 1996, suscrita ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, por el BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO S.A., y la señora CONSUELO GALLEGO PATIÑO, acordaron: Pdf 7 folio 136.

“La empresa acepta también hacerle los siguientes reconocimientos a la señorita CONSUELO GALLEGO PATIÑO: 1. Pensión convencional de jubilación a partir del 23 de diciembre de 1996 liquidada al 22.12.96, hasta que el Instituto de Seguros Sociales o un fondo privado de pensiones, le reconozca la pensión de vejez y una vez ocurrido esto, se le empezará a cubrir el valor de la diferencia que pudiere existir entre la pensión que reconozca el Instituto de los Seguros Sociales o un fondo privado de pensiones y la que le estuviere pagando el Banco en ese momento”

Y seguidamente se especificó en el acuerdo, lo siguiente:

Pero el Banco hará compartida la pensión por concesión especial y en consecuencia, a partir del 23 de diciembre de 1996 le empezará a pagar una pensión liquidada con base en el 75% del promedio salarial del último año hasta que el I.S.S o una entidad de Seguridad Social le reconozca la pensión de acuerdo con los requisitos de edad, cotización y/o valor aportado, para lo cual la señorita Gallego Patiño, se compromete a presentarse a reclamar la prestación ante la Entidad correspondiente una vez reúna los requisitos para tal efecto; de no hacerlo, el Banco podrá hacer compartida la pensión, pagándole sólo la diferencia que presuma le corresponde a la jubilada entre la pensión que le esté cubriendo en ese momento y la que presuma le hubiere reconocido la entidad en caso de haberse presentado.

Una vez la entidad de Seguridad social le reconozca la pensión, el Banco sólo pagará desde ese momento el valor de la diferencia que llegare a existir entre la que le estuviere reconociendo y la reconocida por el I.S.S o la entidad de Seguridad Social.

Las partes dejan constancia de que este acuerdo han querido elevarlo a conciliación judicial como garantía de que él recoge la voluntad libre y espontánea de las mismas.

El despacho en vista del ánimo conciliatorio de las partes y teniendo en cuenta que en esta conciliación no hay renuncia a derechos ciertos e indiscutibles de conformidad con los artículos 15 y 340 del código Sustantivo del Trabajo, acepta y prohíja este acuerdo y les advierte que él hace tránsito de cosa juzgada en los términos de los artículos 20 y 78 del Código de Procedimiento Laboral.

De lo anterior resulta claro entonces que, la demandante mediante acuerdo de conciliación, le fue reconocida **pensión convencional de jubilación** compartida, la cual se le otorgó a partir del 22 de diciembre de 1996, la cual fue inicialmente pagada por el banco y luego el ISS mediante resolución 14418 del 01 de enero de 2001, reconoció la pensión de la demandante, a partir del 2 de noviembre de 1999, en los términos expresamente convenidos. Pdf expediente administrativo.

Ahora bien, la ley reguló la forma cómo a partir del 17 de octubre de 1985, operaría la subrogación de la obligación.

Así las cosas, a partir del 17 de octubre de 1985, se estableció que operaría la subrogación de la obligación, y para ello se expidió el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de ese año, y posteriormente el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, en el que dispuso:

“Artículo 18. COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES EXTRALEGALES. Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.” (subrayas de la Sala)

Sobre el particular, la Jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral ha manifestado en las sentencias SL 5529 de 2018, citada en la sentencia SL 2171 de 2022:

«No sobra precisar que si bien los artículos 5 y 6 del Decreto 813 de 1994 y 45 del Decreto 1748 de 1995, establecen la compatibilidad de las pensiones de jubilación a cargo del empleador con la vejez por cuenta del ISS, la norma inicialmente mencionada, establece que el primero deberá cotizar al ISS hasta tanto el trabajador cumpla con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de vejez, quedando por su cuenta únicamente el mayor valor, si lo hubiera, entre la pensión otorgada por el instituto y la de jubilación que venía percibiendo, y que, además, para la financiación de la prestación que llegase a conceder el ISS, el empleador debe trasladar el valor correspondiente al bono pensional, ello, per se, no impedía que las partes en forma voluntaria, como en este caso a través de la convención colectiva de trabajo, dispusieran que la pensión a cargo del empleador fuera compatible con la de vejez».

En el mismo sentido, mediante proveído CSJ SL4080-2018, adoctrinó:

*«Desde el punto de vista jurídico, propio de ambos cargos, el Tribunal no incurrió en error alguno al sostener que **las pensiones convencionales reconocidas con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, son, en principio, compartidas con las que reconoce el Instituto de Seguros Sociales**, salvo que se exprese en ellas mismas que son compatibles. Tal orientación es la que se deriva expresamente de lo plasmado en el artículo 5 de la referida normativa y es la que ha mantenido de manera invariable esta Corporación a través de su jurisprudencia (Ver las sentencias CSJ SL13190-2015 y CSJ SL498-2016, entre muchas otras)».*

En sentencia SL 1031 de 2022, se refirió la CSJ, en relación con el tema de compatibilidad y compatibilidad pensional, en la cual se dijo:

*“Frente a este último punto, esta sala de la Corte ha señalado, con insistencia, que, por regla general, las pensiones convencionales causadas con anterioridad al 17 de octubre de 1985 son compatibles con las de vejez que otorga el Instituto de Seguros Sociales, pues la posibilidad de compartirlas sólo se generó tras la expedición del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985. Del mismo modo, ha adoctrinado que **las excepciones a dicha regla sólo pueden provenir de un acuerdo entre las partes, plasmado en el mismo instrumento normativo que consagra la prestación, como la convención colectiva, el pacto colectivo o el laudo arbitral.**”*

De acuerdo a la jurisprudencia descrita, la regla general de compatibilidad de las pensiones causadas con anterioridad al 17 de octubre de 1985, encuentra excepción en los casos donde las partes en el texto de la convención colectiva de trabajo o pacto colectivo, fuente del derecho prestacional, estipulan que, la pensión reconocida, ostenta la condición de compatible con las que reconoce el Instituto de Seguros Sociales, lo cual, en este evento en particular no se advierte que hubiese ocurrido, como pretende hacer ver la parte demandante.

El otro aspecto al que se hace referencia en la demanda, concierne específicamente a la pretensión subsidiaria, a través de la cual se pidió:

“En caso de no acoger las pretensiones principales, le solicito que se condene a ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A a pagar a CONSUELO GALLEGU PATIÑO, la pensión que fue reconocida mediante el acta de conciliación del 08 de noviembre de 1996, de conformidad con las condiciones establecidas en la CCT vigente 1985-1987, suscrita el

23 de agosto de 1985, en forma plena, con el carácter de vitalicia y compatible con la pensión legal y en cuantía inicial de \$432.640, para el año 1996, correspondiente al 100% del sueldo promedio mensual devengado en el año anterior al retiro, la cual es excluyente con la pensión voluntaria y/o legal. Lo anterior conforme lo establece los artículos 71°, 54°, 55°, 58° y 62° convencionales; y hacia el futuro, incluidas las mesadas adicionales, y los reajustes establecidos por ley...”

En relación con dicho petitum se insiste que no es posible condenar a la demandada a reconocer y pagar, la pensión que le fue reconocida a la demandante en el acta de conciliación, bajo la egida condiciones y particularidades previstas en la CC 1985-1987, pues dicha convención no es aplicable a la demandante.

Finalmente, el apoderado de la parte demandante en su escrito de alegatos de conclusión en sede de segunda instancia, pidió que se analice el monto de la prestación concedida en el acta de conciliación, sin embargo, este colegiado advierte que, en esta instancia, no es posible realizar un pronunciamiento fuera del marco de los hechos y pretensiones de la demanda, o del objeto de debate (Principio de congruencia – Art. 281 del CGP), pues, de hacerlo, se atentaría contra el debido proceso y derecho de defensa de la pasiva, observándose que este cuestionamiento, solo se trae en los alegatos de conclusión, y no se está ante alguna de las excepciones al principio de congruencia, que, son: (i) *el juez advierte fraude, colusión o una situación abiertamente ilegal que amerite una intervención excepcionalísima en aras de proteger los derechos fundamentales de las partes, según lo previsto en el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL466-2013); (ii) existen hechos sobrevinientes (CSJ SL3844-2015 y SL2808-2018), y (iii) la posibilidad del juez en materia laboral de decidir por fuera de lo pedido”,* resaltando la colegiatura, sobre este último punto, que las facultades ultra y extra petita por regla general, están restringidas a los falladores de única o primera instancia y en esta caso no se dan los presupuestos para que, se haga uso de dichas facultades pues no se está en presencia de un derecho mínimo e irrenunciable que haya sido debatido en el proceso y que, además, haya sido probado.

Sin costas en esta instancia al haberse conocido del proceso bajo el grado jurisdiccional de consulta.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, que se conoce en grado jurisdiccional de consulta, dentro del proceso ordinario promovido por la señora **CONSUELO GALLEGO PATIÑO** en contra de **ITAÚ BANCO CORPBANCA S.A.**

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA